

Una recuperación en sordina

Aún con sus limitaciones normativas, técnicas y financieras, el proceso de reconstrucción después del último terremoto de 2010 tuvo la capacidad de aunar voluntades en torno a un horizonte común, en el cual la recuperación de los bienes culturales dañados —aparte de las viviendas, los equipamientos y la infraestructura—, constituyó una manera de restituir aquellos elementos que nos definen como cuerpo social, cuya continuidad histórica se había visto interrumpida por la fuerza destructora de la naturaleza. El daño causado sobre ese patrimonio, en la medida que golpeaba nuestras propias identidades, fue un aliciente para redoblar los esfuerzos en torno al proceso de reconstrucción, al punto tal que cada bien cultural restituido fue visto como un logro compartido, con una capacidad admirable de postergar en la tarea las clásicas diferencias políticas, sociales o territoriales.

Quizás por el contraste con esa unidad de propósito y fuerza aglutinadora que se fraguó en torno al patrimonio cultural luego del 27-F, resulta tan desconcertante la manera en que, menos de una década después, los bienes culturales comunes parecieron perder de cierta forma su aura y, en el contexto excesivo del así llamado estallido social, emergieron ya no como ese campo compartido que celebramos masivamente cada día de los patrimonios, sino como elementos divisores, símbolos repudiados de un pasado ajeno y opresor, a lo sumo lastres materiales desprovistos de significado y, por lo tanto, prescindibles frente a las nuevas demandas de una sociedad que, hasta entonces, habría permanecido anestesiada.

La vulneración ejercida sobre los bienes culturales a partir de octubre de 2019, si bien tuvo alguna sistematicidad hacia monumentos públicos dedicados a figuras históricas de los períodos colonial y republicano, así como a bienes de la iglesia y las fuerzas armadas, en términos de escala no hizo mayor distinción, afectando indistintamente infraestructura de transporte, centros culturales, museos —como el de Violeta Parra—, cines, comercios, barrios y parques. El catastro oficial de más de 800 inmuebles y monumentos vandalizados da cuenta de un deterioro urbano sin precedentes, difícilmente reversible y cuyas esquivas materiales y sociales llegan hasta la actualidad.

Uno de los hechos más determinantes de este período es que, desbordado el marco institucional y la capacidad de control del Estado por mantener el orden público, y frente a la emergencia de una serie de demandas que gran parte de la sociedad consideraba como



EMILIO DE
 LA CERDA E.

justas y atendibles, un grupo significativo de liderazgos políticos, sociales, académicos e intelectuales —salvo honrosas excepciones, públicamente conocidas— se retiró del debate o bien no tuvo la determinación para separar la erosión de nuestros bienes comunes del fenómeno social en marcha, lo cual contribuyó a contextualizar, avalar y sostener la destrucción del patrimonio cultural de nuestras ciudades y territorios.

Esta cuestionable conveniencia instrumental, oportunismo acompañado en su momento de una vertiginosa fascinación, llevó incluso a algunas autoridades a considerar que era buena idea construir su plataforma electoral sobre los plintos vacíos de los monumentos, como ocurrió con una serie de candidatos a la fallida Convención Constitucional. Sin embargo, el peso de los acontecimientos, la instalación de una nueva sensibilidad y el tiempo que se acumula indefectiblemente, han trocado esta efervescencia en frustración, instalando una incomodidad de base al momento de acometer la tarea de recuperar el rostro y la normalidad de nuestras ciudades.

Este desajuste, sumado al embotamiento y la desconfianza que han cristalizado estos años, pueden servir para explicar en parte la lentitud, anomia y cautela que parece guiar el proceso de recuperación del patrimonio dañado durante el estallido social, cuyos casos más emblemáticos permanecen sin avances significativos, mientras la mayoría de los monumentos desfondados siguen siendo objeto de debate y permanecen guardados en bodegas municipales, sin fecha programada de retorno.

Con todo, y aunque llevados adelante en sordina para no generar mucho ruido, existen esfuerzos destacables de limpieza de fachadas, mejoramiento de espacios públicos y reapertura de simbólicos edificios comunitarios, como las acciones sobre el eje Alameda —incluida la transformación de Plaza Italia, pese al destino aún incierto del monumento al general Baquedano— o el proceso de recuperación iniciado en las iglesias de la Vera-cruz y de la Asunción, en Santiago; así como iniciativas de recuperación de bibliotecas, monumentos y elementos de arte urbano liderados por las municipalidades de Providencia, Concepción y La Serena.